



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Amparo indirecto 140/2024

EN CUERNAVACA, MORELOS VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ELSA JUDITH FON LIZÁRRAGA, SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, HACE CONSTAR Y **CERTIFICA:** QUE EN EL JUICIO DE AMPARO 140/2024 ESTÁ FIJADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A LAS **DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS** DE ESTA DATA; Y, DE UNA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE SE PRECISA QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO PARA SU RESOLUCIÓN; ADEMÁS DE QUE CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD CON EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO; EL ASUNTO NO SE UBICA EN NINGÚN SUPUESTO QUE AMERITE SU ACUMULACIÓN O REMISIÓN A DIVERSO ÓRGANO POR CONOCIMIENTO PREVIO. **CONSTE.**

ELSA JUDITH FON LIZÁRRAGA
SECRETARIA DE JUZGADO

ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO 140/2024, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, A LAS **DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE.**

ELSA JUDITH FON LIZÁRRAGA
SECRETARIA DE JUZGADO

Martha Eugenia Magaña López, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca: Se declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor.

La Secretaria: Juicio de amparo 140/2024, promovido por *********, en representación de su hija adolescente *********, contra de actos del **Titular de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos.**

Se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta.

De igual forma, que ninguna de las partes se encuentra presente y que no fue solicitado el diferimiento o la suspensión de la audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.



Acto seguido, la Jueza indica: Secretaria, dé cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable.

La Secretaria: Se da cuenta con el informe justificado:

- **Director de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos.**

La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de referencia.

Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas.

Secretaria, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes.

La Secretaria: Se hace constar que tanto la parte quejosa como la autoridad responsable **Director de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos** ofrecieron, respectivamente, pruebas documentales.

La Jueza Federal acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de cuenta, sin perjuicio de otorgarles el valor que les corresponda al dictarse la resolución correspondiente.

Concluida la etapa probatoria, se declara abierto el período de alegatos.

Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes.

La Secretaria: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló.

La Jueza Federal: De conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes de alegar; por concluida dicha fase y por finalizada la audiencia.



Amparo indirecto 140/2024

JUEZA MARTHA EUGENIA MAGAÑA LÓPEZ
SECRETARIA ELSA JUDITH FON LIZÁRRAGA

VISTO el juicio de amparo **140/2024**; para dictar la correspondiente

SENTENCIA

La acción constitucional fue instada por ***** en representación de su hija adolescente ***** contra actos del Titular de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado ante la Ventanilla de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, ***** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto señalado en su escrito respectivo.

SEGUNDO. DERECHOS VULNERADOS. La quejosa señaló como tales los tutelados en los artículos 4, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por razón de turno, a este Juzgado de Distrito le correspondió conocer de la demanda de amparo, en proveído de **veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro**, se ordenó formar el expediente y registrar con el número **140/2024**, admitir a trámite, requerir a la autoridad responsable informe con justificación, dar la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con esta fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, donde se ordenó



poner los autos a la vista de este juzgado federal para dictar la sentencia que en derecho corresponde; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SEGUNDO. SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL. En atención a que en el presente juicio de amparo fue promovido en representación de la adolescente ***** quien actualmente cuentan con **diecisiete años**, con fundamento en lo previsto por el artículo 4° Constitucional y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que prevén el derecho de los infantes a participar en los procedimientos en los que estén inmiscuidos sus intereses, se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil.

Lo anterior, debido a que se trata de una adolescente a la que le fue negada la renovación de su pasaporte a fin de asistir a una competencia en Canadá, dado que fue llamada para representar al país como integrante de la selección nacional mexicana de Taekwondo, y por su edad no comprenden tecnicismos jurídicos ni tienen obligación de conocerlos atento a la naturaleza del juicio constitucional que se erige como ese medio judicial, efectivo, sencillo y eficaz para la tutela de derechos fundamentales, por lo que el alcance de esta sentencia debe emitirse en un lenguaje sencillo.

Las consideraciones expuestas tienen sustento en los criterios 1a. LI/2020 (10a.) y 1a. CCCXXXIX/2013 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2022471 y 2005141, de rubros:



Amparo indirecto 140/2024

“JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVRIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN.”

“SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO.”

Así a efecto de fracturar las desigualdades ubicadas en la adolescente quejosa, con la intención de acercar de manera sencilla y clara la determinación tomada en esta instancia judicial y en cumplimiento de la obligación Constitucional a que se ciñe esta juzgadora se ordena la emisión de la sentencia en un lenguaje incluyente y adecuado para su edad.

TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Esta Juzgadora Federal fija la materia de la litis, para lo cual atenderá a la demanda en su integridad, esto es, el texto completo del escrito inicial, anexos y la totalidad de constancias del expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.

Lo anterior, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195745, que dice al rubro:

“ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.”¹

Sobre esas bases, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias del expediente, se desprende que la intención de la parte quejosa consiste en reclamar:

- La negativa de expedir pasaporte a la adolescente *****.

CUARTO. CAUSAS DE INVIABILIDAD. Previo al estudio del fondo del asunto, corresponde analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que de oficio advierta este órgano

¹ Publicada en la página 17, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice 2000.



constitucional, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.²

Al respecto, la autoridad responsable **Director de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos**, hizo valer:

I. Cesación.

La autoridad responsable refiere que es improcedente el juicio de amparo, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo,³ relativa a la cesación de efectos, toda vez que el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, se entregó a la quejosa el pasaporte ordinario mexicano número *****.

Argumento que resulta **infundado**.

Ahora bien, del incidente que deriva del presente juicio de amparo, en específico de la promoción con registro 2229, firmada por el Director de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, se advierte que se expidió a la adolescente quejosa de manera provisional el pasaporte mexicano *****.

Lo cual constituye un hecho notorio para esta Juzgadora Federal en términos de la tesis P./J. 16/2018 (10ª.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017123, cuyo rubro dispone:

“HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”

Por tanto, si bien al día de hoy la quejosa cuenta con el pasaporte ordinario mexicano ***** , lo cierto es que el mismo fue expedido de manera provisional, tal como lo precisó la autoridad responsable.

² **Artículo 62.** Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.”

³ **Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:...

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.”



QUINTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir informe justificado la autoridad responsable **Director de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos** aceptó la existencia del acto reclamado.

Lo cual se corrobora con las documentales relativas al juicio de origen, a las que se les otorga plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles⁴, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en virtud de haber sido expedidas por autoridad pública al ejercer sus funciones.

SEXTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. A efecto de poner en contexto los hechos del caso, es necesario hacer una crónica de los antecedentes más relevantes.

- La joven quejosa practica taekwondo, desde los cinco años de edad y obtuvo el grado de cinta negra a los siete años.
- A los diez años comenzó a entrenar como atleta de alto rendimiento y a competir a nivel nacional.
- En marzo de dos mil veintitrés, le fue otorgado su Registro Único Federado, por la Federación Mexicana de Taekwondo.
- En la última competencia en la que participó, ganó el primer lugar, por lo que **fue llamada para representar al país como integrante de la selección nacional mexicana de Taekwondo.**
- Como integrante de la selección nacional de Taekwondo, fue llamada para participar en una competencia en la ciudad de Vancouver, Canadá, la que se llevó a cabo del siete al once de febrero de dos mil once.
- Al solicitar la renovación del pasaporte por conducto de su progenitora, la autoridad responsable le negó el acceso a dicho trámite, en virtud de que necesitaba el consentimiento de su padre.
- Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que la madre de la joven atleta manifestó bajo protesta de decir verdad que desconoce el paradero del padre ya que el mismo abandonó el domicilio conyugal, por lo que no sabe dónde pueda ser localizado para obtener dicha autorización.

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. La quejosa acude a la instancia constitucional a efecto de combatir la negativa de expedir el pasaporte a su hija, en virtud de no contar con la autorización de su padre.

⁴ **"Artículo 129.-** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones".

"Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo."

"Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado".



Al respecto, formula **un solo motivo de desacuerdo**, el cual sostiene que al negársele el pasaporte a la joven atleta por la falta de la autorización de su padre, del cual desconoce su paradero, la autoridad responsable vulnera los derechos humanos a la identidad, al libre tránsito, transgrediendo así el interés superior de la adolescente pues no existe un peligro de sustracción internacional de la misma, ello, pues únicamente acudiría con su equipo a una competencia de taekwondo en Vancouver, Canadá.

En el caso, se propone analizar si la negativa sostenida por la autoridad de expedir el pasaporte a la adolescente *********; vulnera o no los derechos fundamentales de la adolescente deportista.

Previo a abordar el estudio, es necesario destacar lo que implica el interés superior de la infancia, el derecho a la identidad, al libre tránsito y al desarrollo en el deporte, incluso como proyecto de vida, lo cual se analizará también bajo una perspectiva de género, al tratarse de una mujer que destaca en un deporte de alto impacto.

- Interés superior de la infancia.

Este principio no cuenta con un concepto jurídico determinado, debido a que el derecho positivo no puede establecer límites a cada caso de hecho, dada la expansión de la protección y alcances que genera su aplicación.

Empero, se erige como un mecanismo que reconoce el interés de los niños en todas las decisiones que el Estado deba tomar, ya sea en políticas públicas, legislaciones, actuaciones, decisiones judiciales, entre otras, siempre que se ven involucrados derechos de menores.

Conforme a lo establecido en los artículos 4 Constitucional⁵ y 27 de la Convención Sobre los Derechos del Niño⁶, es obligación para

⁵ Art. 4o.

[...]

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

⁶ Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.



Amparo indirecto 140/2024

todas las autoridades del país velar por el interés superior del menor en todos los asuntos donde convergen derechos de niños como en el caso concreto.

Tanto el derecho doméstico como el convencional, establece como obligación para los Estados, proteger en forma privilegiada el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), lo cual implica que en los asuntos de corte judicial en los que se encuentran involucrados éstos.

La persona juzgadora, ya sea aquella que conoce del proceso de origen e incluso la que opera como juez de control constitucional, debe en todo momento y bajo cualquier circunstancia, emitir sentencia con estricto apego a ese principio preferente, que es el velar por los derechos de los NNA involucrados o donde se puedan afectar sus intereses.

En relación con el tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/2002 precisa que *“la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”*⁷

Lo anterior, aun cuando ello implique que, los derechos tanto de la madre como del padre, **deban ceder frente a los de sus descendientes.**

Incluso, es doctrina consolidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés superior de la niñez debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.

⁷ Corte IDH. Opinión Consultiva OC-17/2002, párrafo 137, punto 2.



derechos de los NNA, donde se impone a los juzgadores la obligación de resolver conforme a lo que es mejor para el niño.

De ahí que la presente sentencia al involucrar derechos de una adolescente de **diecisiete años de edad**, se emitirá, bajo un estándar de máxima protección a sus intereses, como pauta para establecer objetivamente, si el acto que se analiza, se ajusta a los parámetros convencionales y constitucionales.

En relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J.191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 175053, de rubro:

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.”

Bajo ese contexto, resulta importante mencionar que el contenido del párrafo octavo del artículo 4° Constitucional⁸, numeral 8⁹ de la Convención sobre los derechos del Niño y preceptos 13¹⁰ y 19¹¹ de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevén el **derecho a la identidad**.

En ese sentido, de dichos preceptos se concluye que uno de los derechos de las personas desde su nacimiento es el de identidad, que se materializa en tener un nombre, una nacionalidad, estar inscrito al Registro Civil, conocer su filiación, origen, pertenencia cultural, entre otros, por tanto, dicho derecho implica que las personas cuenten con documentos que los identifiquen, como lo es en primer lugar el acta de nacimiento.

No obstante lo anterior, la normativa jurídica establece otro documento para identificarse en territorio extranjero y con ello,

⁸ **Artículo 4...** Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

⁹ **Artículo 8.**

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

¹⁰ **Artículo 13.** Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

...

III. Derecho a la identidad;...

¹¹ **Artículo 19.** Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.



Amparo indirecto 140/2024

garantizar el derecho al libre tránsito establecido en el artículo 11¹² Constitucional, dicho documento es el **pasaporte**, el cual es un documento expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores ello, a fin de acreditar la nacionalidad e identidad en territorio extranjero, y por otro lado para poder salir del territorio nacional, lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 47¹³ de la Ley de Migración y las fracciones I y V del artículo 2¹⁴ del Reglamento de Pasaportes y Documento de Identidad y Viaje.

- Derecho al desarrollo.

El artículo 13 de la Convención CEDAW señala que los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para **eliminar la discriminación contra la mujer** en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

- a) El derecho a prestaciones familiares;
- b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
- c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural”.**

- Perspectiva de género en el deporte.

Ahora, como es ampliamente conocido, el deporte es beneficioso para la salud y el bienestar, contribuye a fomentar el liderazgo, el trabajo en equipo, la perseverancia y otras aptitudes esenciales; no obstante, el nivel de participación de las mujeres y niñas en el deporte sigue siendo inferior al de los hombres y niños a nivel mundial.

Existen diversos factores que contribuyen a esa tasa inferior de participación de las mujeres y niñas en el deporte, los cuales incluso, son ajenos al propio deporte, como normas sociales discriminatorias o

¹² **Artículo 11.** Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

¹³ **Artículo 47.** Para la salida de personas del territorio nacional, éstas deberán:

II. Identificarse mediante la presentación del pasaporte o documento de identidad o viaje válido y vigente;

¹⁴ **Artículo 2.** Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. Documento de identidad y viaje: Aquel que la Secretaría expide para permitir la salida documentada del territorio nacional al extranjero que carezca de un pasaporte vigente y se ubica en alguno de los supuestos señalados en el artículo 41 de este Reglamento;

V. Pasaporte: Documento de viaje que la Secretaría expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad y solicitar a las autoridades extranjeras permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección y, en su caso, dispensen las cortesías e inmunidades que correspondan al cargo o representación del titular del mismo; Existen tres clases de pasaportes: ordinario, oficial y diplomático...



los obstáculos para conciliar las cargas relacionadas con la prestación de cuidados que constituyen a estereotipos de género asignados a las mujeres que no han logrado fracturarse en la sociedad o la simple ideología de creer que cierto deporte o disciplina es “apropiado” para el sexo masculino.

El deporte, refleja los problemas que afectan a toda la sociedad, las virtudes y defectos de la asociación deportiva ayudan o deterioran la vida de las mujeres, la participación femenina en el deporte es muy limitada, pues a la fecha, aún se excluye en buena parte la población de mujeres y niñas, fomentar el deporte femenino, es vital en el intento de alcanzar hábitos de vida saludable, pues reducen riesgos de padecer enfermedades crónico degenerativas, amplía la esperanza de vida, entre otras, no obstante a pesar de la importancia de la práctica deportiva, los avances en incorporación al sexo femenino ha sido lenta.

Al respecto, en el año de dos mil veinte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que los estados son responsables de la adopción de medidas para la lucha contra la discriminación, mismas que deberán ser adecuadas para hacer frente a la discriminación de género; por tanto, esas legislaciones o medidas, acorde con las obligaciones internacionales de derechos humanos, debe ser aplicable en la práctica a los órganos rectores del deporte.

Por su parte, el Estado Mexicano ha establecido como deber de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fomentar la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, promoviendo el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte¹⁵.

¹⁵ **Ley General de la Cultura Física y Deporte.**

Artículo 6. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 7. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,



Amparo indirecto 140/2024

Es complejo analizar las desigualdades estructurales de género en el deporte, cuando en la actualidad vemos que existen espacios para mujeres, sin embargo, las brechas de género y las implicaciones que impactan en las mujeres frente a un deporte que desde sus inicios se consideró diseñado para las características de un varón, porque implica fuerza, contacto físico, concentración, entre otros atributos que por mucho tiempo demeritaban la presencia de mujeres en esa rama.

Es cierto que al día de hoy las competencias en la disciplina del Taekwondo tienen un número significativo de mujeres en sus filas, pero mientras la brecha que se generó por todo el tiempo que la mujer no pudo acceder en forma libre y sin estereotipos a ese deporte, a generado una desigualdad en cuanto al número de mujeres y hombres que han logrado destacar y abrirse paso en esa rama, pues es claro si en sus inicios la mujer tenía vedada esa oportunidad.

A lo anterior, debe sumarse las múltiples implicaciones que dejan fuera a la mujer de los espacios o momentos para avanzar en el crecimiento del deporte, tales como tabús sobre su fuerza y disciplina, temas relacionados con los cambios biológicos en el crecimiento, modificaciones del estado de ánimo por los cambios hormonales, la maternidad, el tema de cuidados, los permisos que pueden otorgar los padres para presentarse a los entrenamientos con la periodicidad y tiempo que se requiere, entre otros.

- Análisis de inconstitucionalidad ex officio.

Precisados los diferentes derechos y enfoques sobre los que debe versar el estudio, destaca que el tema de Litis se centra en dar respuesta a la siguiente interrogante:

¿Es constitucionalmente válido negar la expedición del pasaporte a la adolescente quejosa, por el hecho de que no cuenta con la autorización de su padre el cual refiere desconoce de su paradero, por ser una figura ausente en su vida?

La respuesta al cuestionamiento **es en sentido negativo** y por tanto, es **fundado** el concepto de violación expuesto por la quejosa, analizado en suplencia de la queja por tratarse de una adolescente y

promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.



bajo un control de constitucionalidad ex officio, pues el precepto legal que establece los requisitos para la expedición del pasaporte vulnera los derechos de libertad de tránsito, identidad y desarrollo en el deporte de la infante quejosa.

Ahora, es pertinente precisar que si bien, la parte quejosa señaló como responsable a una autoridad que no tuvo a su cargo la creación de la norma, lo cierto es que esta juzgadora en uso de la facultad convencional conferida analizará la constitucionalidad del artículos 18 y 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad¹⁶, como sistema normativo.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del cumplimiento de

¹⁶ **ARTÍCULO 18.** Para la expedición de pasaportes ordinarios a personas menores de edad, en términos de lo dispuesto por el Código Civil Federal, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán:

I. Comparecer personalmente en compañía de la persona menor de edad ante las oficinas competentes de la Secretaría u oficinas consulares;

II. Entregar la solicitud de pasaporte debidamente requisitada;

III. Acreditar la nacionalidad mexicana de la persona menor de edad, mediante la entrega de alguno de los siguientes documentos:

a) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano;

b) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por las oficinas consulares;

c) Carta de naturalización, o

d) Certificado de Matrícula Consular a que se refiere el artículo 3, fracción VI de la Ley de Nacionalidad.

A falta de los documentos probatorios mencionados en los incisos anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la Ley de Nacionalidad, lleve a la Secretaría a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana.

En el caso de los documentos señalados en los incisos c) y d) de la presente fracción, se deberá entregar original y copia para su compulsas, devolviéndose a los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, el original del documento.

Tratándose de los incisos a) y b) se entregará copia certificada y copia fotostática.

Cuando el registro de nacimiento de la persona menor de edad haya sido realizado con posterioridad a un año a aquél en que tuvo lugar, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 15 del presente Reglamento.

IV. Acreditar su identidad con cualquiera de los documentos señalados en el artículo 14, fracción VI, así como la de la persona menor de edad, con alguno de los siguientes documentos oficiales con fotografía, cuyos datos deberán concordar fielmente con los del documento con el que se esté acreditando la nacionalidad y filiación:

a) Certificado escolar de educación primaria, secundaria, de bachillerato o su equivalente;

b) Constancia del grado de estudios que cursa o credencial escolar vigente, a partir de la educación de tipo básico, otorgados por institución pública o privada incorporada a la Secretaría de Educación Pública;

c) Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, misma que deberá contener las características que para tal efecto establezca la propia institución;

d) Cédula de Identidad Personal;

e) Los documentos probatorios de nacionalidad mencionados en la fracción III, incisos c) y d) del presente artículo;

f) En territorio nacional y, exclusivamente para las personas menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones mencionadas en los incisos a) al e) de la presente fracción, podrán presentar constancia médica con fotografía, con las especificaciones y en los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. Dicha constancia deberá contener el número de cédula profesional del médico, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;

g) En el extranjero, y exclusivamente para las personas menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones mencionadas en los incisos a) al e) de la presente fracción, podrán presentar constancia médica con fotografía y sello de una institución médica reconocida por la ley del lugar donde se encuentra el interesado, o h) Cualquier otro medio de prueba que a juicio de la Secretaría u oficina consular acredite la identidad de los solicitantes, mismos que serán reguladas en disposiciones administrativas con fundamento en el artículo 1 del presente Reglamento.

V. Presentar dos fotografías tamaño pasaporte sin lentes, cabeza descubierta, de frente, a color con fondo blanco y que haya sido tomada hasta 30 días antes de presentar la solicitud de expedición de pasaporte;

VI. Cubrir el pago correspondiente en los términos previstos en la Ley Federal de Derechos, y

VII. Otorgar su consentimiento conforme lo disponen los artículos siguientes. Sin perjuicio de lo antes citado, en aquellos casos en que la documentación o información presentada tenga inconsistencias o irregularidades, la Secretaría verificará su autenticidad ante la autoridad emisora y podrá requerir al solicitante pruebas adicionales que demuestren fehacientemente su nacionalidad e identidad.

ARTÍCULO 19. Para efectos de otorgar el consentimiento al que se refiere la fracción VII del artículo anterior, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, deberán:

I. Acudir personalmente con la persona menor de edad ante cualquier oficina competente de la Secretaría u oficina consular, a requisitar el formato que la Secretaría establezca para tal efecto, y

II. En caso de que las personas facultadas para otorgar el consentimiento correspondiente no puedan concurrir personalmente a la oficina donde se llevará a cabo el trámite porque se encuentren en una ciudad distinta de donde se localiza la persona menor de edad, podrán hacerlo:

a) En territorio nacional ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, y

b) En el extranjero, ante una oficina consular



Amparo indirecto 140/2024

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano, en el cual se originó el expediente varios 912/2010, donde se abordó, entre otros temas, el relativo al control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, a partir de la reforma de diez de junio de dos mil once, al artículo 1 de la Constitución Federal, sostuvo que, atento a dicho numeral, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal sino también por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano.

Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal y la Primera de sus Salas determinaron que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado.

Los criterios en comento, corresponden a la Jurisprudencia 2/2022 y 1a./J. 103/2022 (11a.), sustentadas por la Primera Sala y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024159 y 2024990, que dicen al rubro:

“CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]”

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL.”

De manera que en el amparo indirecto que nos ocupa es factible realizar el análisis de constitucionalidad de la norma base de la negativa de renovar el pasaporte a la adolescente *****.

Ello porque ejercer el control de regularidad constitucional ex officio, que debe realizarse por los Juzgados de Distrito, surge del mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1 de la Constitución



Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9 y 24 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006808 cuyo rubro dice:

“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES.”

Expuesto lo anterior, se analiza la constitucionalidad del sistema normativo comprendido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad.

En efecto, los artículos del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad que prevén el obstáculo para la expedición del pasaporte para menores de edad, lo condicionan al otorgamiento del consentimiento de los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela; mismo que sólo podrá realizarse de dos maneras: acudiendo personalmente con la persona menor de edad ante cualquier oficina competente de la Secretaría u oficina consular, a requisitar el formato que la Secretaría establezca para tal efecto, o en caso de que las personas facultadas no puedan concurrir personalmente a la oficina donde se llevará a cabo el trámite porque se encuentren en una ciudad distinta de donde se localiza la persona menor de edad, podrán hacerlo: a) En territorio nacional ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, y b) En el extranjero, ante una oficina consular.

Esto es, como ocurre en el caso particular, la adolescente quejosa no cuenta con el consentimiento de su padre, pues bajo protesta de decir verdad la mamá de la misma manifiesta que por diversos problemas maritales y personales abandonó el domicilio conyugal y no sabe dónde se encuentra.

Ahora bien, los artículos 1 y 4, párrafos séptimos al undécimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos¹⁷, 18, 19

¹⁷ **“Artículo 1.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los



Amparo indirecto 140/2024

y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos¹⁸, así como el 3, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño¹⁹, reconocen el derecho a la identidad sobre las siguientes premisas normativas:

- a) La igualdad ante la Ley y la no discriminación, cualquiera que sea el motivo, siempre que se atente contra la dignidad humana y ello implique el menoscabo o la anulación de derechos humanos.
- b) El derecho de los niños a la protección y cuidado que sean necesarias para garantizar su bienestar que por su propia condición de menores de edad requieren.
- c) El derecho a tener una identidad en relación con la pertenencia con su familia biológica.

Por su parte, el numeral 13 de la Convención CEDAW señala que para **eliminar la discriminación contra la mujer** en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

- a) El derecho a prestaciones familiares;
- b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 4o. [...] Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez [.]"

¹⁸ "Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno (sic) de ellos.

La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.[.]

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley."

El artículo 24 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

"Artículo 24. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad."

¹⁹ "Artículo 3

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

"Artículo 7

El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida."

"Artículo 8

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad."



c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural”.

Como se advierte, los artículos 18 y 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad, condicionan la renovación del pasaporte al otorgamiento del consentimiento de ambos progenitores, sin embargo, como ya se explicó la adolescente no cuenta con la autorización de su progenitor, por ser un padre ausente en la vida de la niña, tal como lo afirmó bajo formal protesta de decir verdad.

Ahora, para resolver el planteamiento materia de la Litis, es preciso verificar si las normas reclamadas se ajustan al texto Constitucional, para lo cual es necesario correr el test respectivo.

° Test de proporcionalidad.

Al respecto, destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que con la finalidad de constatar la existencia, o no, de la inconstitucionalidad o inconveniencia de una norma es posible emplear diversos métodos o herramientas argumentativas.

Entre los métodos más comunes para solucionar esas problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos, constituyen herramientas útiles para dirimir la violación a derechos humanos.

Lo anterior se apoya en la tesis de jurisprudencia 10/2019 (10a.) y la tesis 1a. CCLXIII/2016 (10a.), sustentada por la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de la Nación, respectivamente, con registro digital 2019276 y 2012156, de rubros:

“TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO FUNDAMENTAL.”

“TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL.”

El test de proporcionalidad, aplicable al presente caso, se desarrolla en dos etapas, como lo ha determinado la Primera Sala, en la tesis que antecede.



Amparo indirecto 140/2024

En una **primera etapa**, debe determinarse si las normas impugnadas inciden en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión.

Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita un derecho fundamental; por tanto, en esta primera fase corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho.

Una vez hecho lo anterior, se determinará si las normas impugnadas tienen algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho en cuestión.

Si la conclusión es negativa, el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis.

En esta **segunda fase**, debe examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho.

Al respecto, es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que no puede resolverse a través de una subsunción o métodos tradicionales de solución de antinomias, sino debe resolverse con ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad.

Así, para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales deben superarse las siguientes gradas, que:

- I. La intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido;
- II. La medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional;
- III. No existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y,
- IV. El grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.



En este contexto, si la medida legislativa no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o *prima facie*.

En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo.

Como se ha determinado en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el test de proporcionalidad es el instrumento metodológico útil para evaluar la validez de las interferencias a los derechos humanos, pues es aquella metodología de implementación judicial que permite mediar entre las normas constitucionales, cuya estructura lógica es la de los principios y los casos concretos, es decir, para aplicar los "mandatos de optimización", que no teniendo prefijados sus hipótesis de aplicación, prescriben que su sentido normativo se maximice en el mayor grado posible en las condiciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto.

Por tanto, el test de proporcionalidad determina el punto constitucionalmente exigible de ese mandato de optimización frente a las normas infraconstitucionales, que pueden basarse en otros fines o bienes constitucionales valiosos, lo que se realiza constatando legitimidad constitucional de estos últimos, así como la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de los medios dispuestos por el autor de la norma.

- Primera etapa.

Bajo ese contexto, se precisa que las normas legales analizadas interfieren en el contenido *prima facie* del derecho a la identidad de la niña, así como el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, ya que la norma impone una requisito para la renovación del pasaporte de la adolescente, a saber, el consentimiento del padre, sin que al efecto la misma cuente con él, pues refiere es un papá ausente.

Ahora, tanto la Constitución, la Convención de Derechos del Niño y Convención CEDAW protegen el derecho a la identidad, al libre tránsito y a la práctica del deporte y establecen, en primer término,



Amparo indirecto 140/2024

que el infante debe ser registrado inmediatamente, para efecto de tutelar las prerrogativas que de ello surge y los deberes que sus representantes legales, tutores e incluso el estado deben cumplir para proteger el desarrollo integral del niño, para posteriormente adquirir un pasaporte, el cual es un documento expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores ello, a fin de acreditar la nacionalidad e identidad en territorio extranjero, y por otro lado para poder salir del territorio nacional; así como el derecho de las mujeres a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

Luego, si las normas reclamadas facultan a la autoridad administrativa a afectar ese derecho en el sentido de limitar la renovación del pasaporte, al no contar con un requisito, a saber el consentimiento del padre; entonces es claro que dichas normas reclamadas sí inciden en el derecho a la identidad, libre tránsito y práctica del deporte y por consecuencia a los que derivan de este.

De manera que sí se supera la primera de las fases previstas al efecto para aplicar el referido test de proporcionalidad.

- Superado lo anterior se pasa a la **segunda etapa**.

Aquí se deben identificar los fines que se persiguieron con la medida, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos Constitucional y convencionalmente, toda vez que no cualquier propósito puede justificar la limitación a un derecho fundamental.

I. Constitucionalidad de los fines perseguidos con la medida.

Para poder verificar si lo dispuesto en los artículos señalados obedece a un fin constitucionalmente válido, es necesario identificar cuáles son los objetivos que persigue la norma.

Los artículos 18 y 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad, disponen:

ARTÍCULO 18. *Para la expedición de pasaportes ordinarios a personas menores de edad, en términos de lo dispuesto por el Código Civil Federal, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán:*

I. Comparecer personalmente en compañía de la persona menor de edad ante las oficinas competentes de la Secretaría u oficinas consulares;



II. Entregar la solicitud de pasaporte debidamente requisitada;

III. Acreditar la nacionalidad mexicana de la persona menor de edad, mediante la entrega de alguno de los siguientes documentos:

- a) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano;*
- b) Copia certificada del acta de nacimiento expedida por las oficinas consulares;*
- c) Carta de naturalización, o*
- d) Certificado de Matrícula Consular a que se refiere el artículo 3, fracción VI de la Ley de Nacionalidad.*

A falta de los documentos probatorios mencionados en los incisos anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la Ley de Nacionalidad, lleve a la Secretaría a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana.

En el caso de los documentos señalados en los incisos c) y d) de la presente fracción, se deberá entregar original y copia para su compulsación, devolviéndose a los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, el original del documento.

Tratándose de los incisos a) y b) se entregará copia certificada y copia fotostática.

Cuando el registro de nacimiento de la persona menor de edad haya sido realizado con posterioridad a un año a aquél en que tuvo lugar, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 15 del presente Reglamento.

IV. Acreditar su identidad con cualquiera de los documentos señalados en el artículo 14, fracción VI, así como la de la persona menor de edad, con alguno de los siguientes documentos oficiales con fotografía, cuyos datos deberán concordar fielmente con los del documento con el que se esté acreditando la nacionalidad y filiación:

- a) Certificado escolar de educación primaria, secundaria, de bachillerato o su equivalente;*
- b) Constancia del grado de estudios que cursa o credencial escolar vigente, a partir de la educación de tipo básico, otorgados por institución pública o privada incorporada a la Secretaría de Educación Pública;*
- c) Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social, misma que deberá contener las características que para tal efecto establezca la propia institución;*
- d) Cédula de Identidad Personal;*
- e) Los documentos probatorios de nacionalidad mencionados en la fracción III, incisos c) y d) del presente artículo;*
- f) En territorio nacional y, exclusivamente para las personas menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones mencionadas en los incisos a) al e) de la presente fracción, podrán presentar constancia médica con fotografía, con las especificaciones y en los formatos que para tal efecto establezca la Secretaría. Dicha constancia deberá contener el número de cédula profesional del médico, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;*
- g) En el extranjero, y exclusivamente para las personas menores de 7 años, a falta de cualquiera de las identificaciones mencionadas en los incisos a) al e) de la presente fracción, podrán presentar constancia médica con fotografía y sello de una institución médica reconocida por la ley del lugar donde se encuentra el interesado, o h) Cualquier otro medio de prueba que a juicio de la Secretaría u oficina consular acredite la identidad de los solicitantes, mismos que serán regulados en disposiciones administrativas con fundamento en el artículo 1 del presente Reglamento.*



Amparo indirecto 140/2024

V. Presentar dos fotografías tamaño pasaporte sin lentes, cabeza descubierta, de frente, a color con fondo blanco y que haya sido tomada hasta 30 días antes de presentar la solicitud de expedición de pasaporte;

VI. Cubrir el pago correspondiente en los términos previstos en la Ley Federal de Derechos, y

VII. Otorgar su consentimiento conforme lo disponen los artículos siguientes. Sin perjuicio de lo antes citado, en aquellos casos en que la documentación o información presentada tenga inconsistencias o irregularidades, la Secretaría verificará su autenticidad ante la autoridad emisora y podrá requerir al solicitante pruebas adicionales que demuestren fehacientemente su nacionalidad e identidad.

ARTÍCULO 19. Para efectos de otorgar el consentimiento al que se refiere la fracción VII del artículo anterior, los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, deberán:

I. Acudir personalmente con la persona menor de edad ante cualquier oficina competente de la Secretaría u oficina consular, a requisitar el formato que la Secretaría establezca para tal efecto, y

II. En caso de que las personas facultadas para otorgar el consentimiento correspondiente no puedan concurrir personalmente a la oficina donde se llevará a cabo el trámite porque se encuentren en una ciudad distinta de donde se localiza la persona menor de edad, podrán hacerlo:

a) En territorio nacional ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, y

b) En el extranjero, ante una oficina consular.

Como se observa, la norma establece como requisito para la expedición del pasaporte, el otorgamiento del consentimiento de los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela y fija como casos el que acuda personalmente o que de no poder concurrir personalmente, podrá hacerlo, si se encuentra, dentro del territorio nacional ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, y si se sitúa en el extranjero, ante una oficina consular.

Lo preceptuado en las normas del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad, busca salvaguardar el derecho de ambos padres a convivir con la infante, y que la misma no sea sustraída por alguno.

De ahí que, lo establecido en los artículos en cuestión persigue un fin Constitucionalmente válido, consistente en la necesidad de garantizar el derecho de ambos padres a convivir con su hijo, así como el derecho de ese último, a la identidad respecto a sus progenitores.

II. Idoneidad de la medida.

Ahora, en relación al segundo punto, consistente en el examen de la idoneidad de la medida, en esta fase del escrutinio debe



analizarse si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado el fin constitucionalmente válido buscado.

En este sentido, el examen de idoneidad presupone la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y grado a lograr el propósito que se busca.

Así, partiendo de la premisa de que el fin buscado con la medida reclamada, esto es, establecer como requisito para la expedición del pasaporte, el otorgamiento del consentimiento de los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela, busca la convivencia del infante involucrado con ambos padres –derecho a la identidad- y evita la sustracción internacional del mismo, es necesario entonces determinar si dicha medida es idónea a fin de contribuir en algún modo y grado a lograr el propósito buscado.

En primer lugar, se precisa que los artículos 18 y 19 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad, prevén los requisitos para la expedición del pasaporte, así como la forma en que se puede otorgar el consentimiento de los padres o quien o quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

Es decir, la norma establece que a fin de que un infante pueda salir del territorio nacional, resulta necesario que ambos progenitores acudan personalmente, a otorgar el consentimiento para la tramitación del pasaporte o que de no poder concurrir personalmente, puedan hacerlo, si se encuentra, dentro del territorio nacional ante cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría o ante Notario Público, y si se sitúa en el extranjero, ante una oficina consular.

Conforme a esas premisas, la limitante normativa analizada, resulta idóneas para alcanzar el fin buscado, relativo a garantizar la no sustracción internacional de los NNA.

Lo anterior, toda vez que el infante tiene derecho a convivir con ambos progenitores y a formar esos lazos de apego con ambos, y a su vez que no sea sustraída por alguno de los mismos, a garantizar el derecho a la identidad del niño y con ello se generen tanto los derechos como las obligaciones relativas a su cuidado y desarrollo integral.



Amparo indirecto 140/2024

Entonces, una vez que se ha constatado el fin válido constitucionalmente y la idoneidad del acto, corresponde analizar si el mismo es necesario o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean idóneas, pero que afecten en menor grado el derecho fundamental de la quejosa.

III. Existencia de medidas alternativas idóneas menos lesivas para lograr dicho fin.

En relación con esta grada del test, esta Juzgadora Federal determina que las normas reclamadas **no la superan**, como ahora se explica.

En el caso concreto, recordemos, la quejosa intentó renovar el pasaporte de su hija *********, quien tiene diecisiete años, sin embargo como la adolescente aun es menor de edad, dicho trámite requería el consentimiento de ambos progenitores.

De acuerdo al contenido de los preceptos legales que se impugnan, se establecen parámetros para contar con ese documento, a saber el pasaporte, con miras a salvaguardar los derechos de identidad, convivir con ambos progenitores y así conocer su apellido, sus orígenes, el derecho a la familia, a desarrollarse en el deporte, desarrollo y libre tránsito previstos en los artículos 4 y 11 Constitucionales que a su vez subyacen en el 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, salvaguardar el derecho de ambos progenitores a convivir con su hijo y que ninguno lo pueda sustraer del país.

Sin embargo, en el caso particular, se arriba a la conclusión de que la prohibición implementada para limitar la expedición del pasaporte, en el este caso la renovación, no es la medida **menos lesiva** para alcanzar la meta deseada.

En efecto atendiendo a lo que establece el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando éstos sean privados ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes “**deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad**”; de ahí, que será el Estado el obligado a garantizar el cumplimiento de ese



derecho, pues es el único documento de identificación oficial con fotografía que puede obtener un infante.

La autoridad a fin de preservar el interés superior del infante deberá restablecer inmediatamente su derecho de identidad y emitir el pasaporte a la adolescente quejosa.

Pues, de no hacerlo, constituye una limitante, en este caso, pues si bien al momento del nacimiento de la adolescente, fue registrada con el apellido de ambos progenitores, **la norma no prevé situaciones como:**

El hecho de estar ante un padre que la abandonó desde pequeña y que se obligue a la quejosa a buscarlo o bien a tramitar una contienda judicial para demostrar el abandono con todas las implicaciones que conlleva como económicas, de implementación de tiempo, emocionales, entre otras.

La circunstancia de ser una atleta destacada de nivel internacional y depender de la autorización del padre ausente para la autorización del pasaporte puede implicar la pérdida de los derechos de la quejosa a desarrollarse en esa rama del deporte y a tener la oportunidad de representar a su país a nivel internacional, como en el caso específico aconteció debido a que aun cuando obtuvo suspensión para efecto de que se emitiera el pasaporte provisional sin que mediara la autorización y la responsable lo emitió, no logró registrarse en tiempo y quedó fuera de la competencia.

Todo esto por problemas entre la pareja, de ahí que es imperativo que el Estado pondere y genere conciencia de que suceden este tipo de fracturas familiares, donde en muchas ocasiones se vive violencia familiar, económica, física, emocional, vicaria, entre otras, para efecto de establecer vías reales de fácil acceso y que respondan con la prontitud requerida para que de forma alguna se anulen o limiten los derechos de las infancias, por lo que el requisito relativo a contar con el consentimiento de ambos progenitores aun cuando uno de ellos es ausente, define que se autorice o no la expedición del pasaporte.

Es decir, la norma establece como requisito indispensable el consentimiento de los progenitores, ya sea acudiendo de manera



Amparo indirecto 140/2024

personal antes las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores o a través de cualquiera de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría, Notario Público, o ante una oficina consular a manera de proteger a los infantes de ser separados de uno de sus padres respecto del otro.

Por lo que resulta inconcuso que resulta insuficiente el otorgamiento del consentimiento de la madre que se ha hecho cargo de la adolescente desde su nacimiento, pues aún y cuando la propia niña sostiene que su progenitor es un padre ausente, la norma le faculta el prohibir la salida de la adolescente del país, pues si bien no está negándolo de manera tácita, **no establece distintas opciones para situaciones derivadas de la fractura familiar**, sino que al no contar con el consentimiento requerido, dado que como se ha dicho en reiteradas ocasiones es un papá ausente, le coarta el derecho a la infante de contar con ese documento, con todas las implicaciones que en el caso se generan.

- **Afectación a la identidad de la adolescente.**

Ahora, dicho precepto impacta en forma transversal en el derecho a la identidad de la adolescente, pues como se dijo es el único documento oficial con fotografía expedido por el Estado Mexicano al que pueden tener acceso las infancias, por lo que, privarla de ese derecho por no contar con el consentimiento del padre no custodia, el cual es un papá ausente, transgrede su derecho de identidad.

A su vez, se limita el goce de los derechos que derivan de aquel, tales como el derecho al esparcimiento, libre tránsito, desarrollo la actividad física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, en general aquellos que se encuentran sujetos a la emisión de dicho documento.

Atento a anterior, se advierte que la medida tomada por la norma para regular y proteger el derecho a la identidad de la adolescente, así como el desarrollo y convivencia con ambos padres -esto atento a que dicho requisito es a fin de la no sustracción del niño- no es la menos lesiva para satisfacer esa necesidad, pues la priva de diversos derechos como se explicó en párrafos que anteceden.



En ese sentido, esta juzgadora determina que la materialización de la negativa de renovar el pasaporte de la adolescente, al no contar con la autorización de un padre ausente, autorización que resulta indispensable en el artículo analizado, afecta en forma directa el derecho de identidad.

- **Afectación de la adolescente a la práctica del deporte.**

Por otra parte, como es ampliamente conocido, el deporte es beneficioso para la salud y el bienestar, contribuye a fomentar el liderazgo, el trabajo en equipo, la perseverancia y otras aptitudes esenciales; no obstante, el nivel de participación de las mujeres y niñas en el deporte sigue siendo inferior al de los hombres y niños a nivel mundial.

Existen diversos factores que contribuyen a esa tasa inferior de participación de las mujeres y niñas en el deporte, los cuales incluso, son ajenos al propio deporte, como normas sociales discriminatorias o los obstáculos para conciliar las cargas relacionadas con la prestación de cuidados que constituyen a estereotipos de género asignados a las mujeres que no han logrado fracturarse en la sociedad o la simple ideología de creer que cierto deporte o disciplina es “apropiado” para el sexo masculino.

El deporte, refleja los problemas que afectan a toda la sociedad, las virtudes y defectos de la asociación deportiva ayudan o deterioran la vida de las mujeres, la participación femenina en el deporte es muy limitada, pues a la fecha, aún se excluye en buena parte la población de mujeres y niñas, fomentar el deporte femenino, es vital en el intento de alcanzar hábitos de vida saludable, pues reducen riesgos de padecer enfermedades crónico degenerativas, amplía la esperanza de vida, entre otras, no obstante a pesar de la importancia de la práctica deportiva, los avances en incorporación al sexo femenino ha sido lenta.

Al respecto, en el año de dos mil veinte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que los estados son responsables de la adopción de medidas para la lucha contra la discriminación, mismas que deberán ser adecuadas para hacer frente a la discriminación de género; por tanto,

**Amparo indirecto 140/2024**

esas legislaciones o medidas, acorde con las obligaciones internacionales de derechos humanos, debe ser aplicable en la práctica a los órganos rectores del deporte.

Por su parte, el Estado Mexicano ha establecido como deber de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fomentar la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, promoviendo el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte²⁰.

En el caso, como ya se explicó la quejosa es una adolescente (17 años) que en virtud de su disciplina, compromiso y capacidad como Taekondoina ha sido seleccionada nacional para representar a México en una competencia internacional que se llevará a cabo en Vancouver, Canadá, por lo que, privarla de dicho privilegio, sería un menoscabo en su desarrollo como mujer deportista, asimismo, generaría un retroceso en la participación activa del género femenino en el deporte e incluso sería una pérdida para todo el país que debe centrar sus esfuerzos para que las mujeres rompan los techos de cristal, convirtiéndose en líderes y referentes internacionales como la propia quejosa a quien se debe proteger en forma reforzada.

De ahí que quien resuelve considere que, los preceptos en estudio, limitan el derecho de la adolescente a su libre desarrollo dentro del deporte, pues la autoridad responsable actuó contrario a lo establecido en la ley, pues debió tomar en cuenta todos los aspectos antes explicados, ello, a fin de determinar la urgencia con la que debía expedirse el pasaporte a la joven atleta, lo cual era con la finalidad de acudir a la competencia de taekwondo en Vancouver, Canadá, lo que

²⁰ **Ley General de la Cultura Física y Deporte.**

Artículo 6. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fomentarán la activación física, la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia, de conformidad con las bases de coordinación previstas en esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 7. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el adecuado ejercicio del derecho de todos los mexicanos y las mexicanas a la cultura física y a la práctica del deporte.



justificaba la expedición incluso de un pasaporte de manera provisional, ello, a fin de salvaguardar los derechos de que goza en su calidad de mujer deportista seleccionada nacional.

Máxime que tal y como lo aseveró la promovente, el progenitor de la adolescente abandonó el domicilio conyugal por lo que no tienen comunicación con él, de manera que dicha situación es totalmente ajena al desarrollo de la infante, lo que no debe interferir en el ejercicio de sus derechos a la identidad, libre tránsito, al deporte, libre esparcimiento.

Atento a todo lo precisado, se advierte que el negar el derecho de la adolescente de renovar su pasaporte, a fin de proteger su derecho a la identidad, así como el desarrollo y convivencia con ambos padres no es la menos lesiva para satisfacer esa necesidad, pues la priva de diversos derechos.

Lo anterior implica llevar a cabo una ponderación entre los beneficios que cabe esperar de la limitación en cuestión y las exigencias para superarla, desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los costos que necesariamente se producirán, sobre los derechos afectados, para establecer si la medida es la menos lesiva.

En el caso particular, es claro que la medida en cuestión **no es la menos lesiva y por tanto proporcional, en sentido estricto**, en atención a que válidamente pueden tomarse diversas medidas para que pueda salir del país e incluso de existir datos que revelen peligro de sustracción se evite el no retorno, como puede ser que solicite a la madre en forma privada datos como fecha en que la adolescente saldrá del país y en la que regresará, indique el lugar y el domicilio exacto de su estancia, así como los posibles lugares que visitará; aunado a ello, si cree que existe sospecha fundada de que la autorización en cuestión pudiera utilizarse para una sustracción internacional, exigirá garantía de que la niña será retornada al país en la fecha indicada.

Con base en lo expuesto, al no superar esta grada del test de proporcionalidad, resulta innecesario atender la restante, al quedar demostrado que los preceptos legales son inconstitucionales.



Amparo indirecto 140/2024

En tal sentido, deberá inaplicarse al trámite de la expedición del pasaporte —en este caso renovación— que pretende hacer la adolescente quejosa y deberá tomarse en cuenta que, afirma que el progenitor de la adolescente abandonó el domicilio conyugal por lo que no tienen comunicación con él, y ordenar la expedición del pasaporte, **en el entendido, que deberá dictar las medidas necesarias para que se de una protección a la niña ante la expedición de ese pasaporte, como pueden ser por mencionar, que el mismo tenga una indicación de que se emite sin autorización de uno de los progenitores, para que a su vez se tenga un registro de su expedición y al momento en que se pretenda utilizar como documento para cruzar alguna frontera, la autoridad pueda solicitar boletos de regreso, identificación del lugar donde estará la infante, el tiempo que durará la salida del país; al generación de alertas de viaje, la emisión de avisos a los consulados o embajadas de México en otros países; la invitación a la competencia, la certificación de que es parte del grupo seleccionado, entre otras, como garantías para el aseguramiento del retorno de la adolescente al territorio nacional, con las mínimas cargas para la adolescente, al no existir elemento de prueba que desvirtúe en este caso el dicho de la mamá.**

Por lo que al ser **fundado** el concepto de violación analizado, **se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa**, para efecto de restituirlos en el goce de sus derechos vulnerados.

OCTAVO. EFECTOS DEL AMPARO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la responsable deberá, en el término de **tres días**:

- Efectuar el cambio de modalidad en sus registros respecto de la expedición del pasaporte entregado a la quejosa de manera provisional para considerarlo como definitivo por la vigencia que se le otorgó.
- Realizar las gestiones necesarias, a fin de que no se le niegue a la joven atleta la salida del país, es decir, no deberá girar ningún tipo de alerta migratoria.
- Dictará las medidas necesarias para el aseguramiento del retorno de la adolescente al territorio nacional, con la mínima carga administrativa y de demostración para la infante, en los términos expuestos en esta sentencia.



Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 76, 77, 78 del 151 al 155 y 192 de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

PRIMERO. La Justicia de la Unión **ampara y protege** a ***** por conducto de su progenitora *****
contra de actos del **Titular de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Morelos**, por las razones y para los efectos preciados en la presente sentencia.

SEGUNDO. Elabórese el formato de lectura fácil para la adolescente quejosa *****

Notifíquese.

Así lo resolvió y firma **Martha Eugenia Magaña López**, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante **Elsa Judith Fon Lizárraga**, Secretaria que autoriza y da fe.

Jesús

EN CUERNAVACA, MORELOS, A **VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**, LA LICENCIADA **ELSA JUDITH FON LIZÁRRAGA**, SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, **HACE CONSTAR Y CERTIFICA:** QUE EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO **140/2024**, SE DICTÓ SENTENCIA EL **VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO**; SIN EMBARGO, NO FUE POSIBLE FIRMAR DE MANERA ELECTRÓNICA EL ARCHIVO, EN VIRTUD DE LOS ERRORES QUE GENERÓ EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, AL MOMENTO DE INGRESAR LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DE LA TITULAR DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. LO QUE SE ASIENTA EN VÍA DE CERTIFICACIÓN JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 283 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY DE AMPARO. **CONSTE.**

Es parte final de la sentencia dictada el **veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro**, en el juicio de amparo 140/2024. **Conste.**

El veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, la licenciada Elsa Judith Fon Lizárraga, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.